

Santiago, diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO;

**PRIMERO;** Que comparece don Francisco Javier Sepúlveda Valenzuela, cédula de identidad número 8.867.741-2, con domicilio para estos efectos en 66 Brummel Place, Stabroeck, Georgetown, Guyana, interponiendo denuncia de tutela laboral de derechos fundamentales en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Raúl Letelier Wartenberg, ambos con domicilio en Agustinas N° 1225, Piso 4, comuna de Santiago. Señala que ingresó a prestar servicios en el Ministerio de Relaciones Exteriores el 01 de abril de 1981, siendo designado embajador de Chile en Nicaragua desde el 16 de septiembre de 2020, cargo que mantuvo hasta el 22 de noviembre de 2022, cuando es designado como embajador a ante el gobierno de Guyana. Que con fecha 8 de noviembre de 2023 se le habría informado que cesaría en sus funciones a partir del 31 de diciembre de dicho año y que debía estar de regreso en Santiago el 01 de febrero de 2024, siendo de esta forma cesado en sus funciones cuando faltaban menos de 10 meses para que cumpliera con la edad legal de jubilación, perdiendo de esta forma beneficios de seguridad social, lo que lo perjudicó en su futura pensión y además perdiendo beneficios para hijos menores, como el bono de escolaridad. Que la actitud del Ministerio sería ilegal, incluso se le habría hecho llegar una carta de renuncia redactada para que la firmara, siendo de igual forma presionado para que presentarse la referida renuncia, que aparecería como voluntaria sin serlo. Estima que estas actuaciones de funcionarios de nivel medio del Ministerio afectan la confianza legítima que como trabajador tendría el actor para el ejercicio de su cargo, después de haber prestado servicios por más de 40 años en la misma repartición, arrogándose estos funcionarios facultades del Presidente de la República. Alega que hay un tratamiento discriminatorio, ya que ha habido casos de embajadores que fueron removidos del cargo, pero se los traslado a Santiago manteniendo su remuneración, lo que no se hizo con él, siendo además una política establece mantener a los embajadores que tienen una carrera dentro del servicio hasta que cumplan al menos con la edad de jubilación. Estima además que la salida se dio de forma deshonrosa para el demandante, toda vez que no se le da tiempo para despedirse protocolarmente del cuerpo diplomático ni de las autoridades del país al que había sido destinado. De esta forma, considerando vulnerado el Art. 19 N° 1, 2, 4 y 16 de la Constitución, pide una serie de medidas de reparación, así como la condena a una indemnización por \$50.000.000.



Cabe señalar que durante el curso del procedimiento la parte demandante ingresó múltiples escritos en los que pretendía ampliar y modificar los hechos de la demanda, pero el Tribunal no accedió a ello por múltiples errores de forma en las presentaciones, por lo que el único acto notificado a la demandada es la demanda originalmente presentada, que se ha reseñado anteriormente.

**SEGUNDO;** Que la demandada contesta la demanda, solicitando el rechazo de la misma en base a las siguientes consideraciones. Señala que en la especie no se ha producido una vulneración de derechos fundamentales, toda vez que siendo el cargo de embajador de exclusiva confianza del Presidente de la República, el nombramiento y remoción es libre por dicha autoridad, y en el caso lo que ha sucedido es que se le pidió al demandante la presentación de su renuncia no voluntaria, conforme al procedimiento respectivo. Expone que el demandante cumplía la función de embajador ante el gobierno de Guyana, siendo nombrado el 01 de septiembre de 2020, en un cargo que es de exclusiva confianza del Presidente de la República, que es el máximo nivel de la planta de servicio exterior, marginando del proceso de calificación, precisamente por la naturaleza del cargo, todo conforme a la facultad que entrega el Art. 32 N° 8 de la Constitución, de manera tal que un embajador no tiene la inamovilidad del resto del personal de la administración civil, sin que haya necesidad jurídica que fundar ni el nombramiento ni la remoción del funcionario. Que con fecha 03 de noviembre de 2023 la subsecretaria de Relaciones Exteriores, como ministra subrogante, en conversación telefónica, pidió la renuncia del demandante, lo que fue refrendado por correo electrónico de 7 de noviembre de 2023, enviado por el jefe de gabinete de la autoridad, en donde se le envía al actor un modelo de carta para presentar la renuncia voluntaria a partir del 01 de febrero de 2023, al no presentar la renuncia voluntaria, el 15 de febrero de 2023, se le pide la renuncia no voluntaria, siendo notificada la resolución por carta certificada, sin que el demandante presentara la referida renuncia, en razón de lo cual se procedió a declarar la vacancia del cargo, conforme al Art. 148 del Estatuto Administrativo. Que el demandante, sabiendo la situación en la que estaba, hizo solicitud de permiso de días administrativos y licencias médicas, sin presentar la renuncia que le era requerida, e incluso se le otorgó al demandante la posibilidad de hacer uso de feriado legal de forma completa. De esta forma, niega la vulneración y pide el rechazo de la demanda.

**TERCERO;** Que en audiencia preparatoria se hizo el correspondiente llamado a conciliación, la que no se produce, fijándose como no controvertido el siguiente hecho:

1.- La existencia de esta prestación de servicios y las funciones desarrolladas por el actor.



Finalmente fueron fijados como controvertidos los siguientes hechos:

- 1.- Los hechos que constituyen indicios de la existencia de vulneraciones de garantías fundamentales.
- 2.- La racionalidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas por la parte demandada.
- 3.- La procedencia, naturaleza y monto de las indemnizaciones y prestaciones solicitadas.
- 4.- La efectividad que el actuar de la denunciada ocasiono un perjuicio a la parte denunciante. Naturaleza y monto de dicho perjuicio.

**CUARTO;** Que en audiencia de juicio fueron incorporados los siguientes medios de prueba por el demandante:

#### DOCUMENTAL

- 1.- Copia de comunicación del director de personal del MINREL fechada 6 de noviembre de 2023.
- 2.- Copia de correo electrónico fechado 7 de noviembre de 2023, enviado por el Víctor Abujatum.
- 3.- Carta de renuncia adjunta a correo enviado el 7 de noviembre de 2023 por el sr. Víctor Abujatum.
- 4.- Copia de informe previsional, de fecha noviembre de 2023.
- 5.- Copia de resolución de designación del demandante como embajador en Guyana.
- 6.- Copia de mensaje enviado con fecha 21 de diciembre de 2023 desde el correo electrónico de Iván Favereau.
- 7.- Certificados de solicitudes de vacaciones del denunciante de estos autos, uno de fecha 29 de septiembre de 2023 y otro de fecha 08 de diciembre de 2024.
- 8.- Copia de certificado médico con diagnóstico emitido por médico psiquiatra nicaragüense, consultado en enero 2024.
- 9.- Currículum vitae del médico psiquiatra don Nelson García Lanzas.
- 10.- Certificado de nacimiento del demandante.
- 11.- Certificados de nacimiento de los dos hijos del demandante.
- 12.- Mensaje N°3848 del 6 de noviembre de 2023.



- 13.- Mensaje 4736 de fecha 21 de diciembre de 2023.
- 14.- Correos electrónicos entre Alejandra Díaz y Nicole Cisterna, de fecha 22 de diciembre.
- 15.- Copia de solicitud de permiso administrativo de fecha 24 de enero de 2024.
- 16.- Copia de liquidación de sueldo del mes de enero 2024.
- 17.- Copia del comunicado de ADICA.
- 18.- Copia de reportaje de Mega, de fecha 25 de enero de 2024.
- 19.- Copia de correos electrónicos enviados por personal del MINREL.
- 20.- Copia de cadena de correos electrónicos.
- 21.- Copias de licencias médicas de fechas 31 de enero y 16 de febrero de 2024.
- 22.- Diagnóstico médico emitido por el Dr. Daniel Elgueta Muñoz.
- 23.- Copia de notificación de la actuario de sumario, de fecha 14 de febrero en curso, citando a audiencia de formulación de nuevos cargos con fecha 26 de febrero en curso.
- 24.- Copia de decreto 206 de 29 de diciembre de 2023.
- 25.- Copia de carta del jefe de gabinete Sr Víctor Abujatum.
- 26.- Copia de liquidaciones de sueldo de diciembre 2023 y febrero de 2024 del demandante.
- 27.- Escala de remuneraciones Ministerio de Relaciones Exteriores.
- 28.-Copia de resolución de Isapre Colmena, que rechaza licencia médica.
- 29.- Cartas de felicitaciones certificadas de autoridades guyanesas, con traducción al idioma español.
- 30.- Copias de sitio web <https://www.chile.gob.cl/guyana>, muestra al día de hoy 17 de marzo de 2024, de la embajada de Chile en Guyana.

#### TESTIMONIAL

Declaró como testigo de la parte demandante don Iván Favereau Urquiza, luego de haber sido legalmente juramentado.

#### OTROS MEDIOS

Se incorporó registro de video, de audiencia con fiscal de sumario administrativo en contra del demandante.

**QUINTO;** Que por su parte la demandada incorporó los siguientes medios de prueba:



## DOCUMENTAL

- 1.- Carta de renuncia voluntaria del denunciante de fecha 01 de agosto de 2020.
- 2.- Resolución Ministerial Exenta N°73 de fecha 01 de septiembre de 2020 que acepta renuncia voluntaria del denunciante al cargo de Ministro Consejero o Cónsul General de 1° Clase, 2° Categoría Exterior, de la Planta del Servicio Exterior, del MINREL.
- 3.- Decreto N°121 de fecha 01 de septiembre de 2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que nombra al denunciante como Embajador de Chile en Nicaragua.
- 4.- Decreto N°278 de fecha 10 de noviembre de 2022, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que traslada al denunciante a prestar servicios como Embajador en Guyana a contar del 16 de noviembre de 2022.
- 5.- Mensaje N°3848 de fecha 06 de noviembre de 2023, que informa adscripción del denunciante a Chile.
- 6.- Mensaje N°4736 de 21 de diciembre de 2023 que informa tramitación decreto respectivo.
- 7.- Solicitud Movimiento de Personal, firmado por Andrea Concha Herrera, de fecha 22 de diciembre 2023, que solicita el decreto de adscripción del denunciante y el pago de lo que se indica.
- 8.- Decreto N°206 de fecha 29 de diciembre de 2023, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que destina a prestar servicios en Chile, en calidad de Adscripto al denunciante, a contar del 31 de diciembre de 2023.
- 9.- Cargas Familiares del denunciante, extraído del Portal SIGEPER.
- 10.- Reporte solicitud de permisos DIPER, año 2024.
- 11.- Decreto N°48 de fecha 01 de marzo de 2024 del MINREL, que declara vacante cargo de Embajador que se indica.
- 12.- Decreto N°48 de fecha 01 de marzo de 2024 del MINREL, con toma de razón de la Contraloría General de la República.
- 13.- Publicación en Diario Oficial del Decreto N° 48.

## TESTIMONIAL

Declaró como testigo de la parte demandada don Iván Favereau Urquiza, luego de haber sido legalmente juramentado.

## OFICIO



Se incorporó oficio de Contraloría General de la República, en donde remite antecedentes que obran en poder de dicho órgano respecto del demandante.

**SEXTO;** Que en la especie no existe mayor controversia en que el demandante ejerció el cargo de embajador de Chile, primero ante el gobierno de Nicaragua y luego ante el gobierno de Guyana, cargo que ejecutaba al momento en que le fue requerida la renuncia a su cargo, que es lo que motiva estos autos. Luego, la situación laboral del demandante tiene una norma expresa que la regula y que se encuentra en la Constitución Política de la República, que en su Art. 32 N° 8 establece expresamente lo que sigue:

*“Son atribuciones especiales del Presidente de la República:*

*(...)*

*8° Designar a los embajadores y ministros diplomáticos, y a los representantes ante organismos internacionales. Tanto estos funcionarios como los señalados en el N° 7° precedente, serán de la confianza exclusiva del de la República y se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella”*

Esta norma obviamente era conocida del demandante, al momento de esta sentencia, al momento de la audiencia de juicio, al momento de la interposición de la demanda y al momento en que tomó la decisión de aceptar el cargo de embajador, no solo porque la ley, y la Constitución, se presumen conocidas por todos, sino que porque, como lo explica el mismo actor, tiene una extensa carrera diplomática, habiendo sido funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores desde 1981, por lo que es evidente que cuando asumió el cargo, lo hizo en pleno conocimiento de que el mismo era de exclusiva confianza del Presidente de la República y que dicha autoridad es quien libremente puede designar, pero también remover, a los embajadores, constando en la documental de ambas partes que para acceder al cargo de embajador, en un primer momento en Nicaragua, el demandante renunció al cargo de planta que tenía anteriormente, cuestión que hizo de forma voluntaria y, de nuevo, a sabiendas de la normativa que se aplica a los embajadores, sin que haya prueba en la causa de que haya sido objeto de ningún tipo de engaño o información falsa cuando accedió al cargo ni que haya habido ningún vicio de la voluntad cuando presentó su renuncia a su cargo de planta en el año 2020, error que en cualquier caso sería de derecho, por lo que no vicia el consentimiento. Así las cosas, cuando una persona decide aceptar la designación de embajador, lo hace sabiendo que ese cargo no tiene estabilidad ni inmovilidad y que la duración del mismo depende de



forma exclusiva del Presidente de la República, que por norma constitucional tiene plena libertad para cesar a la persona, por las razones que estima conveniente, en razón de lo cual la alegación sobre la confianza legítima no tiene cabida en la especie, porque este tipo de funcionarios no tienen expectativa alguna de permanecer en su cargo más allá de lo que decida el Presidente. No existe obligación jurídica de entregar motivos por los cuales se pide la renuncia a una persona que ejerce un cargo de exclusiva confianza y el Tribunal no tiene competencia para cuestionar o calificar dicha decisión, porque es una facultad que la Constitución entrega de forma directa y que se condice con la facultad que tiene el Presidente para llevar adelante, como mejor le parezcan, las relaciones internacionales del país, conforme al numeral 15 del mencionado Art. 32 y acorde a su calidad de Jefe de Estado. Debe aclararse además, porque al parecer la parte demandante tiene una confusión de conceptos, que el cese en funciones de un funcionario de exclusiva confianza se da por medio de la solicitud de renuncia, que puede ser voluntaria, y en caso de que el funcionario se niegue, entonces se lleva a cabo el procedimiento de renuncia no voluntaria, que es un concepto jurídico que se aplica a este tipo de personal, y en caso de que no se presente tampoco esta última, entonces se procede a la declaración de vacancia del cargo, todo conforme al Art. 142 del Estatuto Administrativo.

**SÉPTIMO;** Que así las cosas, las solicitudes de renuncia que se hicieron al demandante se ajustan a derecho, porque siendo el de embajador un cargo de exclusiva confianza, si es que el Presidente de la República desea terminar el nombramiento, lo que correspondía es que al demandante se le informase que tenía que presentar su renuncia, que es lo que se ha hecho en la especie. Ahora, evidentemente la persona que hace la coordinación en concreto para la presentación de la renuncia y el procesamiento documental no es el Presidente de la República, el Estado de Chile y el ministerio de Relaciones Exteriores son organizaciones burocrática complejas y el Presidente es el órgano máximo dentro de toda esa organización, lo que implica que siempre hay una serie de funcionarios que ejecutan sus decisiones y se hacen cargo de la gestión administrativa de ellas, no siendo razonable que una persona espere que, ante la solicitud de renuncia de un cargo, sea el Presidente de la República en persona que comunique la decisión y envíe los documentos necesarios para llevarla a cabo. Lo que sucedió en la especie, es que ante la decisión tomada fue el jefe de gabinete de quien era ministra subrogante de relaciones exteriores en el momento, quien informa al demandante que debe presentar su renuncia, pero, conforme a la comunicación que fue incorporada por el demandante, no solo informa de ese hecho, sino que además se refiere a una serie de cuestiones administrativas, que obviamente deben ser gestionadas por un funcionario, no



por el Presidente, así, en una primera comunicación se le indica al demandante que debe tomar en consideración diversas cosas, como por ejemplo los pasajes de regreso al país desde Guyana, las asignaciones, la entrega de la misión y las vacaciones programadas, es decir, que al demandante no se le indicó simplemente que debía renunciar, sino que se le ofreció la coordinación necesaria para la ejecución de ese acto y de lo que implicaba desde una perspectiva de logística institucional, pero también personal y familiar. Luego, el día 07 de noviembre de 2023 se le envía al demandante un nuevo correo electrónico, en donde se detallan estas coordinaciones administrativas, diciendo al demandante que las vacaciones que restaban del año las podría tomar antes de dejar el cargo y que en el mes de enero de 2024 podría hacer uso de vacaciones nuevamente o bien hacer trámites personales. De esta forma, en la demanda se alega que la petición de renuncia se habría hecho por otros funcionarios, no por el Presidente, pero dicha afirmación no tiene sentido, desde el momento en que es evidente que la solicitud de renuncia acarrea una serie de cuestiones administrativas que deben ser gestionadas por funcionarios del Ministerio, que es lo que se estaba haciendo mediante las comunicaciones que han sido incorporadas por el mismo demandante, lo que por supuesto quedó en manos de un funcionario de la repartición pública. No ve el tribunal nada de irregular en esta situación, de la misma forma que la Contraloría General de la República tampoco detecta ninguna ilegalidad en el procedimiento, desde el momento que el decreto que declara la vacancia del cargo del actor, ante su injustificada negativa a presentar su renuncia, fue tomado de razón por el órgano de control, conforme al documento incorporado por la demandada, lo que descarta cualquier vicio en la petición hecha al demandante.

**OCTAVO;** Que en cuanto a la oportunidad en la que se le pide la renuncia al actor, lo cierto es que el Presidente de la República no puede estar limitado en el ejercicio de una atribución constitucional por la conveniencia de los funcionarios que ejercen cargos de exclusiva confianza. La Constitución entrega al Presidente la facultad de hacer nombramiento y remoción de embajadores por razones de Estado y de mejor ejecución de la política exterior, y a esas razones se subordina la conveniencia de los funcionarios, por tanto, la edad del demandante y el hecho que estuviera pronto a jubilar puede generar problemas en su vida personal, pero esos problemas personales quedan subordinados a las necesidades de Estado y de la política exterior definida por el Presidente de la República, precisamente por aplicación de los numerales 8 y 15 del Art. 32 de la Constitución, cuestión que como se ha dicho antes, era perfectamente sabida por el demandante. Puede existir algún uso habitual dentro de los nombramientos de embajadores, que tienda a no pedir la renuncia de personas que no hayan cumplido con su edad de jubilación, pero eso no es más que un uso habitual, no una obligación jurídica,



ni un elemento que limite la potestad que tiene el Presidente entregada de forma directa y exclusiva por la Constitución, que no puede ser objeto de calificación en cuanto a su oportunidad por el Tribunal. Mucho menos puede el Tribunal hacer una calificación de la oportunidad de la decisión, en relación con el hecho de que el demandante no haya tenido tiempo suficiente para despedirse del cuerpo diplomático del país al que estaba destinado, esa es una cuestión de oportunidad que se evalúa por parte de la autoridad que hace las designaciones, siendo solo ella es la que evalúa si es que es conveniente el momento y los tiempos en que se ejecuta la salida del personal diplomática de determinada destinación.

Luego, a diferencia de lo que se plantea en la demanda, y de la forma en como se explicó antes, de las comunicaciones sostenidas con el demandante no es posible inferir que haya habido ningún tratamiento especialmente hostil hacia su persona, antes por el contrario, siempre se coordinaron las diversas cuestiones relacionadas con el cese de su cargo, incluyendo la posibilidad de hacer uso de vacaciones y además las asignaciones respectivas para el traslado que tenía que ejecutar, incluso se le envió un modelo de carta de renuncia a presentar para que lo usase, y a diferencia de lo que se alega en la demanda, esta no es una forma de vulneración, en el sentido de presentar un documento listo para la firma con su nombre, sino que de hecho es una parte de la coordinación necesaria, en donde se le presenta al actor un documento “modelo”, que es lo que se indica en el correo electrónico, que el demandante podía usar o no, a su propia conveniencia. De esta forma, no solo la decisión de pedir la renuncia del demandante se ajusta a derecho, sino que además la ejecución de ella fue razonable y proporcionada, siendo atendidas las necesidades administrativas del demandante por personal del Ministerio de Relaciones Exteriores de una forma adecuada, por lo que no hay tampoco en la forma ningún elemento reprochable a la demandada.

Cabe señalar además que la existencia de un sumario administrativa en contra del actor no es tampoco un indicio de vulneración, porque, conforme al video en donde se notifican los cargos al demandante, lo que motiva ese procedimiento es una actuación del demandante anterior a la petición de renuncia y el término de su nombramiento, sin prueba de si dicho procedimiento ha terminado o no y en cualquier caso porque el cese de funciones del demandante se debe a la pérdida de confianza del Presidente de la República, y las razones por las cuales ello ocurre no son objeto de control judicial, por lo que si es que el Presidente tomó o no consideración este sumario para pedir la renuncia del actor no es relevante, dado que los motivos del Presidente no pueden ser ventilados en un juicio cuando se trata de funcionarios de exclusiva confianza.



**NOVENO;** Que así las cosas, en la especie lo que se ha podido apreciar es a una persona que ejercía un cargo de exclusiva confianza, respecto de la cual se pidió, cuando la autoridad lo estimó pertinente, la renuncia al cargo, que debió haber sido presentada en su momento, pero ante la negativa del demandante de ejecutar lo que correspondía, se procedió a la declaración de vacancia del cargo, que fue tomada de razón por parte de la Contraloría General de la República, por lo que no se aprecian vicios de legalidad en ese acto, sin que hayan elementos que rodeen el actuar del órgano administrativo que permitan sostener que en la ejecución de esta decisión del Presidente de la República, conforme a la norma constitucional respectiva se pasaran a llevar los derechos fundamentales del demandante. De la misma, no hay en la especie actos de discriminación en contra del actor, porque no se ha sostenido ni probado en juicio ningún factor de discriminación que sea ilícito, toda vez que un acto de discriminación no es solo una diferencia de trato entre una persona y las demás, en este caso embajadores a los que no se les pidió al renuncia, sino que además esa diferencia tiene que estar basada en alguna categoría que sea ilícita, y en la especie no hay elementos que den cuenta de ninguna de esas categorías, de manera tal que el Tribunal lo único que conoce es que al demandante se le pidió su renuncia por haber dejado de contar con la confianza del Presidente de la República, que es precisamente lo contrario a una categoría ilícita, sino que es un elemento que la norma constitucional expresamente establece como aquel que determina el término de los servicios de un embajador, esto en la oportunidad que el Presidente estime mejor, que es un elemento que se sobrepone a la conveniencia para el funcionario, porque cuando se trata de funcionarios de exclusiva confianza, lo relevante no es el efecto que genere en el funcionario la decisión de la autoridad, sino que la mejor ejecución de, en este caso, la función diplomática, que es decidida de forma exclusiva por el Presidente.

Por tanto, el Tribunal estima que en el caso no existen elementos que dan cuenta de una vulneración de derechos fundamentales, en razón de lo cual la demanda de autos debe ser rechazada en todas sus partes, incluyendo la indemnización de perjuicios que se reclama, ya que para hacer responsable a la parte demandada de perjuicios es necesario en primer lugar que se le pueda atribuir hechos ilícitos, lo que no ocurre en la especie, de la forma en como se ha explicado.

**DÉCIMO;** Que habiendo sido valorada la prueba conforme a las normas de la sana crítica, estima el Tribunal que no hay otros medios que permitan modificar las conclusiones a las que se ha arribado precedentemente. En cuanto a la prueba de la parte demandada, solo sobreabunda en las conclusiones expresadas



Respecto de la prueba de la parte demandante, se han incorporado solicitud de vacaciones, que solo prueba que dentro de la coordinación administrativa con el demandante incluso se consideró tiempo suficiente para que él pudiera hacer uso de este derecho, lo que concurre a descartar vulneración, mismo que se puede decir respecto de las solicitudes de permiso administrativo, de la misma forma se han incorporado antecedentes médicos, informes y licencias, que no son relevantes en la causa porque no existe hecho ilícito que haga responsable a la parte demandada de los daños que esa situación implica, misma cuestión se puede decir del informe previsional, que por lo demás no es una prueba concluyente sobre ningún daño previsional, porque el mismo documento señala que no es definitivo y que se basa exclusivamente en la información del mismo demandante, igual situación en la que se encuentra el certificado de nacimiento del demandante, en cuanto a los certificados de sus hijos, como se señaló antes, el demandante sabía perfectamente cuál era su situación cuando aceptó el cargo de embajador, y sabía que su familia debía adaptarse a decisiones de la autoridad como la de autos. En cuanto a liquidaciones de remuneraciones, esta es una cuestión puramente administrativa que no desmiente la licitud de la decisión de la autoridad y el hecho de que el actor no haya sido objeto de tratamiento hostil en su ejecución. Respecto de las cartas de autoridades de Guyana, que son cartas de buena crianza, más de que de felicitaciones, son cuestiones meramente protocolares, misma situación con las actividades de las que da cuenta la página web incorporada, mientras que el reportaje de un medio de comunicación no tiene ninguna información o real investigación de hechos que afectan al demandante, a lo sumo la demanda, por lo que no es prueba de los hechos de la causa. Respecto del comunicado de la asociación de funcionarios, este es emitido por un tercero, que hace una calificación de la actitud del demandante, sin prueba que el órgano público haya participado de ninguna forma en la confección del documento. En cuanto a la declaración del testigo, nada señala este que sea diferente a la dinámica de hechos que se ha establecido antes y de la que dan cuenta los documentos, de la forma en como se ha explicado.

Y visto además lo dispuesto en los artículos 452, 453, 454, 456, 457, 458, 459, 485, 489, 493 y 495 del Código del Trabajo, y 19 y 32 de la Constitución Política de la República, se resuelve:

I.- Que se rechaza la denuncia de tutela laboral de derechos fundamentales interpuesta por don Francisco Javier Sepúlveda Valenzuela en contra del Fisco de Chile.



II.- Que habiendo sido totalmente vencido, se condena en costas al demandante, regulándose las personales en la suma de \$500.000.-

**RIT T-46-2024**

**RUC 24- 4-0540225-0**

**Dictada por don FRANCISCO VEAS VERA, Juez Suplente del 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.**



A contar del 08 de septiembre de 2024, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>